

3

**Penalización del juego clandestino**

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 13.

4

**Patronato de Liberados**

–El texto del proyecto de comunicación aprobado es el que figurará en la pág. 91.

**III****INSERCIONES**

1

**Solicitada por el señor senador Massoni**
**FUNDAMENTOS DE LA INSERCIÓN  
DEL SENADOR MASSONI**
*Modificaciones propuestas*

1º – Modificar el artículo 14 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 14: La libertad condicional no se concederá:

- a) A los reincidentes;
- b) A los condenados por los delitos tipificados en el libro II, título III, capítulo II, del presente código.

2º – Modificar el segundo párrafo del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiera corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho años de pena privativa de la libertad, podrá eximir de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los artículos 119, 120, 139, 139 bis y 146 del Código Penal.

3º – Modificar el artículo 1º de la ley 24.390, de Plazos de Prisión Preventiva, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 1º – La prisión preventiva, no podrá ser superior a cuatro años, sin que se haya dictado sentencia. No obstante, cuando la cantidad de delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere, para su debido contralor.

4º – Modificar el artículo 11 de la ley 24.390, de Plazos de Prisión Preventiva, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Quedan expresamente excluidos de los alcances de la presente ley:

a) Los imputados por el delito previsto en el artículo 7º de la ley 23.737, de régimen penal de estupefacientes, y aquellos a quienes resultaren aplicables las agravantes previstas en el artículo 11 de esa misma ley;

b) Los imputados por delitos contra la integridad sexual tipificados en el libro II, título III, capítulo II, del Código Penal de la Nación.

5º – Agregar el siguiente párrafo a continuación del artículo 63 del Código Penal de la Nación:

En los delitos previstos en el libro II, título III –“Delitos contra la integridad sexual”–, cuando la víctima fuere un menor, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya, o hubiere alcanzado, en caso de fallecimiento, los dieciocho años de edad.

6º – Agregar como artículo 147 bis de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad, el siguiente:

Artículo 147 bis: A los efectos del artículo anterior, en aquellos supuestos de delitos contra la integridad sexual, el interno será asistido a través de programas de rehabilitación y tratamiento adecuados en tiempo y forma a la evolución de su trayectoria penitenciaria, incrementándose su aplicación en los momentos de cercanía a las excarcelaciones. Dichos programas contemplarán diferentes niveles, según la peligrosidad del interno, y consistirán, como mínimo, en apoyo terapéutico, chequeos de control, valoración de los aspectos sociales, psicológicos y fisiológicos, métodos de control de potenciales conductas agresivas y estrategias para evitar el riesgo de reiteración, y en técnicas de modificación de conductas, evaluándose en cada caso, la posible aplicación de tratamientos farmacológicos.

7º – Agregar como artículo 124 bis del libro II, título III, capítulo II, del Código Penal de la Nación el siguiente:

Artículo 124 bis: En todos los casos de condenados por delitos de este capítulo II, una vez cumplida la condena, previo diagnóstico criminológico del cuerpo de peritos que así lo aconsejen, el juez deberá imponer una medida de

seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de rehabilitación médico, psicológico y social, mediante un régimen de internación en una institución especializada, el que sólo podrá cesar por resolución judicial.

La institución donde se llevará a cabo el tratamiento será determinada por el juez a propuesta del cuerpo de peritos.

8º - Agregar como sección quinta dentro del capítulo II de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, los siguientes artículos

#### SECCIÓN QUINTA

*Tratamiento de los abusadores sexuales y violadores (artículo 56 bis al 56 sexies)*

#### *Cuerpo de peritos*

Artículo 56 bis: Para el tratamiento de los condenados por los delitos establecidos en el libro II, título III, capítulo II del Código Penal de la Nación, se creará en cada unidad penitenciaria un cuerpo de peritos técnico-criminológico, que estará constituido por un equipo multidisciplinario conformado por:

- a) Un psiquiatra;
- b) Un psicólogo forense;
- c) Un asistente social;
- d) Un representante de la defensoría oficial;
- e) Un representante del consejo correccional del establecimiento penitenciario;

Los representantes de los incisos a) y b) deberán contar con especialización en abuso sexual, criminología o disciplinas afines.

#### *Abusadores sexuales y violadores*

Artículo 56 ter: En todos los establecimientos deberán existir instalaciones especiales para el tratamiento de los condenados por delitos contra la integridad sexual, los cuales no podrán ser alojados con el resto de los internos.

Los condenados por estos delitos, que presuntamente presenten patologías severas, serán internados en establecimientos y/o en secciones separadas especializadas del servicio penitenciario, donde, en condiciones de seguridad apropiada, se desarrollará un programa que atienda la faz asistencial específica que requiera cada caso en particular.

El movimiento y distribución y/o reubicación del procesado será dispuesto por la Jefatura del Servicio Penitenciario a propuesta del cuerpo de peritos técnico-criminológico con comunicación al juez competente.

#### *Evaluación*

Artículo 56 quater: El informe que produzca el cuerpo de peritos técnico-criminológico será con-

feccionado con un criterio interdisciplinario que a nivel penitenciario evaluará el desempeño institucional; en los aspectos médicos atenderá las necesidades de tipo preventivo y/o asistenciales; en el área psicológica las características de personalidad y modalidad de ajuste al medio; y en lo social la influencia del contexto socio-histórico-cultural.

Artículo 56 quinquies: El cuerpo de peritos técnico-criminológico realizará evaluaciones periódicas según el requerimiento de cada caso a fin de proponer la permanencia o reubicación del interno en la modalidad que estime conveniente. El resultado de las mismas se consignará en el legajo técnico de evaluación periódica, que se iniciará con el primer informe de evaluación producido después de su admisión.

#### *Cumplida la condena*

Artículo 56 sexies: Cumplida la condena, el cuerpo de peritos técnico-criminológico realizará un dictamen sobre la evolución del interno, el cual se elevará al juez competente, quien dispondrá:

a) Si ha cesado la peligrosidad del interno, su inclusión en un régimen terapéutico de externaciones transitorias o continuación con el tratamiento específico en otros establecimientos especializados y/o su egreso con el alta definitiva;

b) Si no ha cesado la peligrosidad del interno, una medida de seguridad curativa a la que se refiere el artículo 124 bis del Código Penal de la Nación, que consistirá en un tratamiento psiquiátrico de rehabilitación dentro de una institución especializada, fijado por el cuerpo de peritos técnico-criminológico, el que dictaminará los antecedentes, diagnóstico y pronóstico del mismo, cesando éste por resolución judicial.

9º - Agregar como inciso V del artículo 17 de la ley 24.660 el siguiente:

V: Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la presente ley, no podrá otorgarse el beneficio del ingreso al régimen salidas transitorias y semilibertad a aquellos condenados por los delitos establecidos en el libro II, título III, capítulo II; del Código Penal de la Nación.

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Las presentes propuestas tienen por objeto abordar la reincidencia y la reinserción de los condenados por delitos contra la integridad sexual.

Atento al tipo de delito y a que existe una altísima posibilidad de que aquellos que cometen delitos sexuales se conviertan en reincidentes, es preciso garantizar el cumplimiento de la condena. La modificación realizada al artículo 14 del Código Penal exceptúa de la libertad condicional a todos aque-

llos que hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual de las personas.

Asimismo propongo modificar el artículo 316 del Código Procesal Penal, por el cual se le niega al beneficiario de la eximición y por consecuencia da la excarcelación; si concordamos a lo dispuesto en el artículo 317, inciso a) del Código Procesal Penal. Si les negamos este beneficio a las mujeres que fingen estar embarazadas para dar a su supuesto hijo derechos que no les corresponden; a los imputados por alterar o suprimir la identidad de un menor de 10 años; a los que retienen u ocultan a un menor y a los que raptan a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de éste, considero adecuado y necesario equiparar los delitos contra la integridad sexual previstos en los artículos 119 y 120 del Código Penal con estos mencionados. En este sentido también quedan excluidos de los beneficios de la ley 24.390, de plazos de prisión preventiva.

Las reformas propuestas no hacen más que incluir un nuevo supuesto de excepción a los ya establecidos previamente. A los efectos de comprender claramente los alcances de la modificación debemos recordar algunas definiciones:

– Libertad condicional: toda posibilidad de que un condenado a la pena privativa de la libertad pueda recuperarla antes de la finalización del efectivo cumplimiento de la condena, luego de haber cumplido una serie de requisitos. La libertad condicional esta regulada en el artículo 14 del Código Penal.

– Prisión preventiva: es la medida coercitiva más severa, aplicada contra los imputados durante el proceso, y consiste en su encarcelamiento. Se encuentra regulada por el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación y los plazos se encuentran establecidos en la ley 24.390.

La prisión preventiva sólo puede ser dispuesta por el juez de instrucción al dictar el auto de procesamiento, basado en su convicción de que la sentencia habrá de condenar al imputado a pena privativa de la libertad:

– Exención de prisión: se concede desde el momento de la imputación hasta el dictado de la prisión preventiva.

– Excarcelación: se concede desde el momento del dictado de la prisión preventiva.

#### CUADRO 1:

Momento del proceso: Detención y prisión preventiva.

Condena: Plazo máximo 2 años excepto estupefacientes.

Qué se puede pedir: Exención de prisión, excarcelación y libertad condicional.

ventiva, destacamos que el Pacto de San José de Costa Rica dice en su artículo 7º, “Derecho a la libertad personal, inciso 5º”: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable...”.

El “plazo razonable” debe ser analizado en el contexto de la situación social de la comunidad, la mínima capacidad jurisdiccional y aun policial de Estado, que pone en peligro no sólo al detenido sino a toda la comunidad.

Debe quedar claro que el acceso de la libertad de un detenido con graves problemas psicológicos y aun intelectuales, sin darle al mismo resguardos mínimos (psicológicos, educativos, culturales, etcétera), genera situaciones de alto riesgo para todas las partes involucradas con el delito, en especial el propio autor.

No debe perderse de vista que la acumulación actual de difíciles investigaciones judiciales, la inexistencia de tecnología y aun la fragilidad de los procedimientos instrumentados, abren caminos peligrosos que no pueden ser superados. Por ello, se ha propuesto un plazo mayor de cuatro años, por ser razonable en el marco fáctico señalado supra.

La razonabilidad del Pacto de San José de Costa Rica no es un elemento conceptual numérico y abstracto, sino concreto y determinable en relación con la situación pública de los Estados comprendidos en los procesos judiciales. Es tan cierto lo dicho, que la razonabilidad pedida, no fue fijada cuantitativamente sino sujeta a aspectos sociológicos a tener en cuenta en cada caso. Ejemplo concreto de lo dicho es el contenido de propio artículo analizado.

Es posible que los dos años fijados en el año 1994, fueran la consecuencia de la realidad social del país. Ese marco señalado se ha modificado tan gravemente en el país, que obliga a un análisis particular que recepte las realidades del delito, sus autores y los sujetos pasivos de dichos hechos.

Debe señalarse, asimismo, que el autor del delito no sólo genera un perjuicio a la sociedad sino a sí mismo. El sujeto activo requiere seguridad para sí mismo, que es el elemento exigido por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Entendemos que la razonabilidad se encuentra en un incremento del plazo llevándolo hasta cuatro años, a fin de que el Estado viabilice la seguridad, la educación y el tratamiento de los sujetos activos del delito, con cárceles que resguarden a sus habitantes y con tribunales que sistematicen y agilicen los trámites procesales. Sería dramático pensar en libertades irresponsables anticipadas, por necesidades de espacios físicos.

El bien jurídico protegido a través del artículo 4º del presente proyecto de ley, esto es, la protección de los menores de edad y el interés superior de todo

niño, intenta extender el término de prescripción de la acción que establece el artículo 63 de nuestro Código Penal, posibilitando la persecución e investigación de aquellos delitos contra la integridad sexual, perpetrados contra menores de edad, más allá de los términos comunes que ofrece dicho artículo, con la clara intención de que esta clase de crímenes no permanezcan impunes. En este sentido el Código Penal español contiene, en su artículo 132.1, idéntica previsión.

Por lo regular, las personas que sufrieron algún tipo de violencia sexual no cuentan a nadie lo que les sucede. Esto se debe a que se sienten amenazadas o erróneamente culpables de lo que les pasa. Cuando la violación es cometida por un familiar cercano, la víctima se encierra todavía más en sí misma, debido a que su lealtad a la unión familiar le impide decirlo, pues teme que, al enterarse, la familia se separe. Así como cuando hay un homicidio se sabe que ninguna acción podrá devolver la vida a la víctima, los abusados piensan a veces que nada podrá reparar el daño sufrido.

Es necesario incorporar en la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, un artículo 147 bis que contemple un período indeterminado de reclusión para su tratamiento psicológico en un establecimiento especial para ese tipo de conductas. Los agresores son personas que, a diferencia de las víctimas, necesitan tratamiento siempre, y teniendo en cuenta factores como el alto grado de reincidencias en este tipo de prácticas pese a que los especialistas coinciden, en relación al tratamiento, que el fracaso del ideal terapéutico es muy elevado. Es decir, el tratamiento no es fácil y se fracasa por varios factores. Entre otros, porque el tratamiento no suele ser voluntario y presenta dificultades técnicas muy graves. No hay protocolos, los agresores son muy distintos unos de otros.

En cuanto al tema de la medida de seguridad, el objetivo fundamental es complementar la condena por este tipo de delitos, y además establecer el efectivo tratamiento clínico como complemento de la sanción aplicada por la Justicia.

La violación es un problema de seguridad pública que involucra una perspectiva multidisciplinaria: médica, jurídica, psicológica, psiquiátrica, sociológica (de trabajo social y asistencia social) y política; demanda un tratamiento asistencial, ya que este, tipo de agresión sexual produce efectos psicológicos negativos a corto y largo plazo en las víctimas de este tipo de delitos.

Los informes de especialistas con larga experiencia en el tratamiento de estos temas sostienen que los violadores y abusadores sexuales reinciden y tienen pocas posibilidades de recuperarse. Debemos tener en cuenta el antecedente del artículo 1º del presente proyecto inspirado en el artículo 16 del régimen penal de estupefacientes de la Nación (ley

23.737), el que establece una medida de seguridad curativa a los condenados que dependen física o psíquicamente de estupefacientes, obligándolos a seguir con un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario.

El Código de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires (ley 12.246) en su artículo 100 establece que "no podrá otorgarse el beneficio del ingreso al régimen abierto y las salidas transitorias a aquellos condenados por los [...] delitos: b) Delitos contra la integridad sexual, en sus formas agravadas (artículo 119, párrafo 4, incisos a), b), c), d), e) y f) del Código Penal y c) Violación seguida de muerte (artículo 124 del Código Penal)", el cual es un directo antecedente para el artículo 3º del presente proyecto.

Lo que esta propuesta busca es que quienes cometan estos delitos, no sólo cumplan la totalidad de su condena, sino en los casos en los que se considere necesario se les imponga una medida de seguridad, no dejando dudas en la interpretación de los jueces, en cuanto a la no posibilidad de que los condenados puedan beneficiarse con: salidas transitorias; prisión domiciliaria; prisión discontinua; semidetención y libertad asistida.

Es hora de atender la importancia de la extensión del cuidado psicológico y psiquiátrico de este tipo de enfermos sociales en institutos especializados, poniendo especial atención en que la mayoría de los violadores han sido sujetos pasivos de un delito similar al que ahora cometen. Las estadísticas son claras, el 90% de los violadores y abusadores sexuales reinciden en el delito, por ello, los especialistas propician "un control permanente" y anticipan que no conocen casos de "recuperación total".

Todos saben qué es lo que ocurre dentro del sistema penitenciario con los imputados por delitos sexuales. Cuando ingresan son violados por todos, agravándose en consecuencia el estado espiritual de los condenados.

Graciela Dubrez, integrante del Observatorio Internacional de Prisiones Argentinas, sostiene que "las cárceles no socializan, ya nadie lo niega. Es más, tal como están las cosas, no sorprende que quienes deban garantizar la seguridad de los internos y la de la población en general terminan utilizándolos para delitos de la más variada gama, como todos nos enteramos. Presa del impacto emocional por las revelaciones de delitos tan aberrantes como lo es el de violación, queda poco margen para la reflexión... Los violadores no deben mezclarse con los demás internos. Razón por la cual deberá habilitarse un establecimiento especial para su alojamiento y quedará a cargo del equipo al salud cuándo y, en qué condiciones obtienen su libertad".

El abordaje terapéutico debe realizarse en contextos correccionales necesariamente institucionales. En el país, el trabajo terapéutico al que hago men-



ción se hace en condiciones deficitarias en las unidades penitenciarias o no se realiza. Los requerimientos para el tratamiento son básicos y de bajo costo. Los condenados por delitos contra la integridad sexual de las personas deben estar separados del resto de los internos, y tratados por especialistas hasta remediar su malestar psicológico.

No se conocen casos de recuperación total y eso nos obliga a pensar en medidas de protección para la sociedad y en asegurar el adecuado y firme control del individuo. En cuanto al tratamiento de los agresores, los especialistas coinciden en que el fracaso del ideal terapéutico es muy elevado. Es decir, el tratamiento no es fácil y se fracasa por varios actores. Entre otros, porque el tratamiento no suele ser voluntario y presenta dificultades técnicas muy graves. No hay protocolos, los agresores son muy distintos unos de otros.

Asimismo, se observa que los condenados por estos delitos poseen una conducta ejemplar dentro de las penitenciarias, debido en gran medida a que consideran en su faz interna que no han cometido un delito.

Resulta ya un hecho comprobado la tendencia hacia la reiteración delictiva que evidencian los ofensores sexuales, y así numerosas opiniones profesionales indican que existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo, aquellos que cometen delitos sexuales se conviertan en reincidentes. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que en los casos que se consideren necesarios, los violadores deberán seguir un tratamiento psicológico y cumplir con una medida de seguridad en pos de una mejor reinserción social.

Finalmente, y en cuanto a este punto, la propuesta tiende a rescatar la necesidad de la comunidad de contar con mecanismos de defensa que permitan adoptar actitudes preventivas de protección y limitar las posibilidades de que se repitan, haciendo especial énfasis en un cuidadoso tratamiento y control sobre los victimarios del presente tipo de delitos. Todos debemos estar preocupados por el futuro, atento a que serán los últimos años de nuestras vidas.

*Norberto Massoni.*

2

### **Solicitada por el señor senador Massoni**

#### **FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL SENADOR MASSONI**

El dictamen traído a consideración posee una serie de imprecisiones que conspiran negativamente a la protección del bien jurídico que se pretende tutelar.

Artículo 2º y 5º: Como principio se establecen en el artículo 2º, las condiciones que deberán respetar las licenciatarias al momento de la comercialización de equipos celulares.

Equipos que han de entenderse nuevos, puesto que en el artículo 4º se prohíbe de manera expresa la venta, cesión y/o transferencia de equipos celulares usados.

Ahora bien, el artículo 5º dispone el cumplimiento de los requisitos del artículo 2º para la transferencia de los equipos.

Aquí es donde la redacción se vuelve confusa, o esta disposición debe estar dentro del artículo 2º volviéndolo redundante, puesto que la compraventa implica transferencia (artículo 1.323 Código Civil), o bien, lo que se regula es una nueva situación jurídica.

Para el Diccionario de la Real Academia Española la transferencia implica ceder a otra persona el derecho, dominio o adquisición que se tiene sobre algo.

Sin quererlo la figura del artículo 5º permitirá la posibilidad que una persona transfiera su teléfono celular, y esta acción importaría la venta de un equipo usado, cuestión expresamente prohibida en el artículo 4º.

Se propone eliminar el artículo 5º, y en su caso incorporar el concepto en el artículo 2º.

Artículo 3º: En cuanto al artículo 3º propongo el agregado del siguiente párrafo:

“Adjuntando la autorización correspondiente y fotocopia autenticada del documento del usuario fiscal.”

Esta propuesta tiene como finalidad que la autorización sea fehaciente a los efectos de evitar posibles reactivaciones de equipos hurtados o robados de manera fraudulenta.

Artículo 6º: La disposición del artículo 6º en cuanto a que la venta de tarjetas de telefonía celular deba realizarse por medio de bocas de expendio autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional, quien fijará las condiciones, nos coloca frente al ejercicio de una facultad con un alto grado de discrecionalidad y la posibilidad de creación de monopolios.

Nos encontramos frente a un exceso reglamentarista innecesario, prácticamente estaríamos en presencia de una semiestatización de la cadena de ventas similar a los registros notariales.

No debemos olvidar que lo trascendente es facilitar el control de los usuarios, que podrá lograrse con otros medios.

Lo que es peor que tanto esta disposición como las contenidas en los diversos artículos del dictamen no resuelven el problema central que nos ha llevado a esta situación, y es el ineficaz ejercicio del control por parte del organismo de control del servicio público.

La autorización del Estado nada agrega a dicho control, perjudicando a los usuarios innecesariamente.

Artículo 7º: En el artículo 7º se crea en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación un registro y se impone la obligación de informar en el artículo 8º a las empresas de servicio de telefonía, esta disposición está carente de sanción en el caso de incumplimiento de la obligación, cuestión que debería haberse previsto.

Artículo 9º: Se otorga aquí una facultad a las fuerzas policiales y de seguridad que con esta redacción puede provocar dos situaciones: un ineficaz control por parte de las mismas, atento a que se las obliga a verificar una situación sin determinar cuál es el elemento que los poseedores deberán exhibir para probar la tenencia regular o por esto mismo un ejercicio abusivo de la atribución por dichas fuerzas.

Creo que es conveniente la creación, al igual que en los automóviles, de una "tarjeta verde" para los equipos, dicho instrumento hará que lo dispuesto en este artículo no se convierta en letra muerta

*Norberto Massoni.*

3

### **Solicitada por el señor senador López Arias** REGISTRO DE TITULARIDAD DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1º - Las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular móvil deberán llevar un registro de titularidad del servicio, que contendrá el nombre, apellido, número de documento nacional de identidad y domicilio del titular de la línea o número de servicio asignado, debiendo contar con la totalidad de los datos referidos en forma previa a la habilitación del servicio.

Art. 2º - Para aquellos servicios de telefonía celular habilitados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, y respecto de los cuales las empresas prestatarias del servicio de telefonía móvil celular no cuenten con los datos exigidos en el artículo 1º, sus titulares deberán concurrir a dichas empresas a informar los mismos en el plazo máximo de 6 (seis) meses a contar desde la entrada en vigencia de la presente, y en la forma que disponga su reglamentación.

Art. 3º - Pasados los 6 (seis) meses a contar desde la entrada en vigencia de la presente, las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular móvil procederán a inhabilitar y dar de baja aquellas líneas o números de servicios asignados a cuyo respecto no se contare con los datos exigidos en el artículo 1º.

Art. 4º - A aquellas empresas prestatarias del servicio de telefonía celular móvil que incumplieren las disposiciones contenidas en los artículos que an-

teceden, se les impondrá una sanción pecuniaria cuya cuantía y modalidades de ejecución serán establecidas en la reglamentación de la presente, sin perjuicio de otras responsabilidades que legalmente concurran.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Marcelo E. López Arias.*

4

### **Solicitada por el señor senador Gallia**

Señor presidente:

Deseo expresar en estos momentos algunas palabras a efectos de dejar bien en claro los motivos por los cuales votaré afirmativamente la sanción de los proyectos de ley que estamos tratando.

El primer proyecto, modificatorio del Código Penal, es hoy imprescindible.

Como bien expresa el autor en sus fundamentos, a partir de diciembre del 83 se ha tratado, mediante la búsqueda de soluciones resocializadoras, aliviar la situación carcelaria modificando incluso institutos como la condena condicional, la excarcelación y la reincidencia, de tal forma que hoy estamos ante un cuadro del cual es necesario salir.

No debemos permitir que los criminales no cumplan la totalidad de su pena sin que el Estado, que tiene que velar por la seguridad de la comunidad, tome los recaudos necesarios para que estos ciudadanos se reinserten en la sociedad.

No debemos permitir que la laxitud de la Justicia o las falencias carcelarias justifiquen tampoco que seres humanos que erraron el camino reincidan por el solo hecho de no saber cómo adaptarse a la sociedad o confíen que la bondad de algunos institutos alivianen sus condenas.

Es cierto que los condenados tienen derechos humanos. Y también es cierto que los miles de argentinos que están con necesidades no optan por el camino del mal para satisfacerlas, y es para éstos que debemos legislar, protegiéndolos, dándoles la seguridad que se merecen y castigando a los culpables.

Tampoco debemos caer en el garantismo mal entendido. Si tenemos un problema carcelario, arreglemos ese problema y no dejemos salir a la calle a aquellos reos que no se encuentran en situación de convertirse en ciudadanos de bien. Todos tienen derecho a una segunda oportunidad. Pero... ¿una tercera o una cuarta?

Evalúemos médicamente, psicológicamente, a los reos. Controlemos que verdaderamente se encuentran trabajando, bajo tratamiento, con contención social del entorno.

Hasta podríamos preguntarnos qué es más barato... ¿Preparar a esas personas para su salida, controlarlas, brindarles apoyo y oportunidades? ¿O llenar las calles con miles de miembros de las fuerzas

de seguridad dándoles a los demás ciudadanos una falsa imagen de tranquilidad?

Todos quisiéramos vivir en comunidades sin delitos, pero hoy existen y están desbordando a todo régimen jurídico.

Nuestra sociedad hoy se encuentra atacada por diversas formas delictuales, las cuales, si bien se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal, necesitan de una serie de conductas que no están específicamente penadas, imposibilitando con ello el justo accionar de nuestros magistrados.

El avance tecnológico en la última década ha hecho del teléfono celular, casi podríamos decir, un cómplice necesario de actividades criminales.

Sancionar esta ley que regula la venta de telefonía celular móvil, que pena la venta de aparatos usados, la adulteración lógica y física de sus números de control y de las tarjetas de telefonía debe ser el comienzo de la concientización, por parte de nuestra ciudadanía, de la importancia de tratar a ese aparato que debería servir únicamente para comunicarnos, con el respeto y los cuidados que debe tener un arma de fuego o nuestra documentación personal. Simples y honrados ciudadanos pueden tener serios problemas por no denunciar su extravío a tiempo, por no denunciar comunicaciones que no realizaron y muchos otros ejemplos.

Cuando la telefonía celular llegó a nuestro país era un artículo suntuario e incómodo. Poco a poco pasó a ser parte de uno tanto en el ámbito privado como público, paradigma del estatus. Y más acá en el tiempo pasó a ser prácticamente una necesidad para los más de ocho millones de usuarios. Ahora bien, cabe preguntarnos por qué es necesario.

Ya no es necesario para estar al tanto de nuestros intereses o mejorar el desempeño de nuestras actividades. Ahora es necesario para saber cómo están nuestros hijos, para que nos abran la puerta del garaje al llegar a nuestro domicilio, para poder comunicarnos con el auxilio mecánico al quedarnos varados antes de que nos asalten. Para poder ir a buscar a la parada de colectivo a nuestros hijos por temor a que caminen solos las pocas cuadras hasta la falsa seguridad de su casa. Para poder llamar a la policía si los ladrones nos cortaron el acceso al teléfono fijo. Y como cada vez son más pequeños y bonitos se ostentan como símbolo de modernidad, demostrando así que somos o pertenecemos a aquel estrato social que lo puede solventar, tentando así a los delinquentes a tomarnos como víctimas posibles.

Es cierto que este problema no es de ahora. Ya hace unos años, en el asalto con toma de rehenes del Banco Nación Argentina de Ramallo, provincia de Buenos Aires, en el caso llamado "Masacre de Ramallo", se constató que los delinquentes realizaban constantes llamados a vaya a saber quién por intermedio de aparatos de telefonía celular, aparatos que las posteriores investigaciones judiciales no pudieron encontrar.

Y como éste hay cientos de ejemplos. Incluso casos con poca repercusión pública o que no la tuvieron. Secuestros, asaltos, tomas de rehenes, interceptación ilegal de llamadas a particulares como tarea de inteligencia predelictual, y hasta a los poderes del Estado que utilizan esta tecnología como auxiliar indispensable, como las comunicaciones entre jueces y policías; teniendo todos un aliado en común por así decirlo, y es el teléfono celular. Pero este sistema no es el perverso. El hombre lo ha hecho perverso.

Hoy podemos tener un aparato con más de una línea. O varios aparatos con la misma línea. Y lo que es más grave, sin enterarnos siquiera.

También nos preguntamos si técnicamente se pueden controlar estos malos manejos. Todos los consultados dijeron que sí, pero cabe preguntarnos si hay voluntad de hacerlo. Y hoy nosotros, por nuestra parte, respondemos que sí.

En las reuniones de las comisiones respectivas hemos escuchado por parte de los operadores que el control es posible y que se hace actualmente. La realidad nos marca otra cosa. Hemos escuchado también que la falta de tipificación del delito ata a los jueces al momento de sentenciar. Pues bien, con la sanción de esta ley creo que se solucionan estos problemas. Las licenciatarias deberán hacer mejor los controles y los jueces podrán castigar a los culpables con el Código Penal en mano.

Hemos escuchado que la prohibición de venta por parte de agentes no licenciarios generará desempleo, ya que de esta actividad calculan que viven unas diez mil personas. Yo me pregunto cuál será el supermercado que vende el blister con un teléfono celular que despedirá empleados o cerrará por no poder venderlos más. O qué kiosco bajará su persiana por no poder vender tarjetas prepagas, ya que si así lo desean podrán ser autorizados por el Poder Ejecutivo.

Hemos escuchado que la venta de aparatos usados y la importación de aparatos del mismo tipo abaratan los costos de los usuarios. Y también mejoran los ingresos de las licenciatarias al vender mayor cantidad de servicios que es el objeto en sí mismo de estas empresas. Por eso le estamos dando al Poder Ejecutivo la potestad de regular la venta de este tipo de equipos "...únicamente, en la satisfacción de necesidades básicas e impostergables de la población...".

Hoy, esta tecnología, escasamente regulada por el avance incontenible de sí misma, es un aliado de la criminalidad que necesitamos y debemos combatir.

Hace pocos días fuimos testigos silenciosos de una demostración pacífica de profunda ira en contra de la inseguridad. Memoriosos de los actos públicos no recordaban haber presenciado semejante demostración en los últimos años, realizada tan ordenadamente, tan correcta, tan tranquila, a pesar de que se palpaba indignación y necesidad de justicia.

Las lágrimas de Juan Carlos Blumberg en memoria de su hijo Axel, como las de tantos padres anteriormente, son fiel reflejo de un castigo que sufre nuestra sociedad y que hoy está en nuestras manos, al menos en parte, evitar para un mañana mejor.

Señor presidente, por estas breves palabras quiero dejar plenamente justificado mi voto afirmativo a la sanción de estos proyectos.

*Sergio A. Gallia.*

5

### Solicitada por el señor senador Terragno

FUENTE: INFORME ANUAL 2002 DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CRIMINAL

#### *Quiénes están entre rejas*

Perfil de los presos, clasificados según distintos criterios

#### *Por edad*

Menores de 24	14.625	32,52 %
25 a 34	17.041	37,90 %
		70,42 %

35 a 44	7.878
45 a 54	3.522
55 a 64	1.206
Más de 65	288
No consta	409
<b>Total</b>	<b>44.969</b>

#### *Por sexo*

Masculino	42.593	94,72 %
Femenino	2.366	
No consta	10	
<b>Total</b>	<b>44.969</b>	

#### *Por nacionalidad*

Argentinos	42.771	95,11 %
Chilenos	452	
Bolivianos	379	
Uruguayos	373	
Peruanos	313	
Paraguayos	155	
Brasileños	58	
Espanoles	33	
Colombianos	30	
Sudafricanos	23	
Italianos	20	
Chinos	14	
Británicos	6	
Ecuatorianos	3	
Nigerianos	1	
Otras nacionalidades	323	
No consta	15	
<b>Total</b>	<b>44.969</b>	

#### *Por educación*

Primaria	20.339	45,23 %
Primaria incompleta	10.084	22,42 %
Nada	5.015	11,15 %
		78,80 %
Secundaria incompleta	6.199	
Secundaria completa	1.839	
Estudios univ. incompletos	212	
EGB 3 incompleta	212	
Estudios terciarios incompletos	193	
Estudios terciarios completos	142	
EGB 3 incompleta	142	
EGB 2 incompleta	106	
Estudios univ. completos	101	
EGB 1 incompleta	73	
EGB 2 completa	40	
EGB 1 completa	29	
Polimodal incompleto	29	
Polimodal completo	5	
No consta	209	
<b>Total</b>	<b>44.969</b>	

#### *Por estado civil*

Solteros	31.376	
Divorciados	633	
Viudo	560	
Separados	419	
Subtotal (sin pareja estable)	32.988	73,36 %
Casados	5.886	
En pareja	5.939	
No consta	156	
<b>Total</b>	<b>44.969</b>	

#### *Por situación laboral al momento de caer presos*

Desocupados	15.183	33,76 %
Subocupados	12.591	28,00 %
		61,76 %
Con empleo a tiempo comp.	5.317	11,82 %
No consta	11.878	26,41 %
<b>Total</b>	<b>44.969</b>	

#### *Por la capacitación laboral que tenían*

Ni oficio ni profesión	18.615	41,40 %
Oficio	14.112	
Profesión	2.371	
No consta	9.871	21,95 %
<b>Total</b>	<b>44.969</b>	

#### *Por el lugar donde vivían*

En centros urbanos	40.663	90,42 %
En zonas rurales	2.147	
No consta	2.159	
<b>Total</b>	<b>44.969</b>	



*Por la provincia donde vivían*

Buenos Aires	22.671	50,41 %
Córdoba	4.991	
Ciudad de Buenos Aires	3.021	
Mendoza	2.381	
Santa Fe	2.156	
Salta	1.520	
Neuquén	966	
Entre Ríos	833	
Misiones	822	
Río Negro	774	
Tucumán	684	
San Juan	565	
Jujuy	449	
La Pampa	426	
Chubut	417	
Santiago del Estero	347	
San Luis	287	
Corrientes	282	
Formosa	279	
Catamarca	240	
Chaco	217	
Santa Cruz	170	
Tierra del Fuego	111	
La Rioja	100	
No consta	260	
<b>Total</b>	<b>44.969</b>	

*Por la situación legal en la que se encuentran*

Procesados que esperan la sentencia en la cárcel	26.447	58,81 %
Condenados	17.756	
Contraventores	4	
Inimputables	424	
Otras situaciones	308	
<b>Total</b>	<b>44.969</b>	

6

**Solicitada por la señora senadora Avelín**

Buenos Aires, 1º de abril de 2004.

*Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.*

Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia, a fin de solicitarle tenga a bien impulsar la sanción, en la Honorable Cámara a vuestro cargo, de la legislación penal que contempla los siguientes puntos:

1. Una ley que reprima la portación de armas con pena de prisión no excarcelable.

2. Una ley que obligue a la registración pública de la telefonía celular móvil, con indicación de los datos personales del titular y su documentación. Asimismo, se registren quiénes venden o alquilan dichos aparatos. Prohibición de venta a quienes registren antecedentes penales.

Regular la facultad de las fuerzas de seguridad a verificar la titularidad en la vía pública y al secuestro de la tenencia irregular.

3. Adoptar un sistema de documentación personal (DNI) que impidan su falsificación o adulteración, similar al implementado con los pasaportes.

4. Legislar un sensible aumento en las penas mínimas y máximas para los delitos de homicidio, secuestro y violación (mínimo 20 años) y establecer un régimen de especial severidad, cuando en el delito participen o estén involucrados funcionarios o miembros de las fuerzas de seguridad. Las penas sean siempre de cumplimiento efectivo y total. Sin salidas anticipadas en ningún caso. Modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores.

5. Modificar la pena en condenas por dos o más hechos. Las penas deben sumarse sin límite máximo.

6. Que la pena perpetua sea perpetua. No más 25 años máximo.

7. Legislar imponiendo para los encarcelados—sean procesados o condenados— una reeducación a través del trabajo. Establecer un mínimo de 8 horas diarias en trabajos para la comunidad, obras públicas nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, se instalen talleres, industrias o manufacturas de cualquier tipo en el interior de las cárceles para el trabajo y el aprendizaje de artes y oficios.

El trabajo dignifica tanto al hombre libre como al detenido.

Todas estas medidas requieren también una verdadera reforma del sistema judicial, a los efectos de obtener una Justicia rápida, efectiva y con jueces idóneos, para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho.

Por todo lo expuesto le solicito inste a la pronta sanción de las leyes solicitadas, se acompañará a la brevedad las firmas de quienes adhieran a esta solicitud, en ejercicio del derecho a peticionar que establece la Constitución Nacional.

Finalmente le recuerdo que todos merecemos vivir seguros dentro del marco de la ley. Que la ley se cumpla, hoy y siempre.

Saluda a vuestra excelencia con la mayor consideración.

*Juan Carlos Blumberg.*

DNI 7.755.967